

# Movimientos indígenas y ONGs en México

Desarrollo, autonomía y ciudadanía en México

Gunther Dietz

**Desde los años 80 en México se fue articulando una conflictiva relación entre nuevos actores indígenas regionales y ONGs impulsadas por actores urbanos que realizan proyectos de desarrollo en zonas indígenas. Los conflictos se remontan al desigual trasfondo biográfico de los protagonistas y a la dependencia de actores externos antagónicos que asumen funciones mediadoras entre la población rural indígena y las agencias de desarrollo nacionales e internacionales. La actual confluencia de ONGs y organizaciones indígenas debe ser vista en el contexto de la creciente «ciudadanización» de los movimientos sociales tanto urbanos como rurales. La observación electoral y la lucha por los derechos constitucionales de la población indígena generan un modelo de «aprendizaje ciudadano» que logra superar el tradicional aislamiento de los pueblos indios del resto de la sociedad civil.**

**E**l año 1994, decisivo, «maldito» e «interminable» (Castañeda 1994), ha sido declarado por el periódico mexicano *La Jornada* como «el año de las ONGs», de las organizaciones no-gubernamentales activas en México. A pesar de la aparición, mediáticamente cronometrada, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de su impacto en los movimientos indígenas, por lo menos la prensa capitalina independiente consideraba que lo novedoso de aquel año de cambios y transformaciones no residía en el resurgimiento de movimientos indígenas, sino en la consolidación definitiva de formas de organización independientes en el seno de la sociedad civil mexicana. Inmediatamente después del enfrentamiento armado entre el EZLN y el Ejército, diversas ONGs arraigadas tanto en Chiapas como en Ciudad de México crean un Espacio Civil por la Paz (Espaz), dedicado a canalizar ayu-

GUNTHER DIETZ: antropólogo alemán; profesor e investigador del Departamento de Antropología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada (España).

**Palabras clave:** movimientos indígenas, ONGs, sociedad civil, México.

das humanitarias así como campamentos de observadores nacionales e internacionales hacia el interior de la cercada región de conflicto. Su principal actividad en estos primeros meses, sin embargo, consistía en crear y aprovechar «cordones humanos» como espacios desarmados de protección que permitieran establecer las primeras negociaciones entre representantes zapatistas y gobierno mexicano. A estas negociaciones, que en 1995 desembocarían en el denominado Diálogo de Sacam Ch'en, el EZLN también logra integrar a múltiples representantes de los nuevos movimientos indígenas como sus «asesores». Así, en el contexto de los diálogos, por primera vez surge una red de organizaciones de la sociedad civil que abarca tanto a los movimientos indígenas como a las ONGs urbanas. No obstante, frente al aparente estancamiento en el que se encuentran las negociaciones desde que el gobierno de Ernesto Zedillo se negara a reconocer los resultados de Sacam Ch'en, cabe preguntarse por el tipo de relación establecida antes y después de 1994-1995 entre ambos actores, entre las ONGs mexicanas de origen urbano, por un lado, y las nuevas organizaciones indígenas, por otro.

### Orígenes opuestos

Tanto el «boom» de las ONGs como la reaparición de los movimientos indígenas pueden retrotraerse a la segunda mitad de los años 70 y la primera mitad de los 80. Ambas pautas organizativas no solo aparecen de forma paralela y simultánea, sino que a menudo surgen delimitándose mutuamente. El potencial emergente conflictivo que se irá acumulando entre ambos actores queda ilustrado por la antagónica evolución que toman las biografías de los protagonistas de cada uno de estos movimientos:

– El movimiento indígena resurgido desde comienzos de los años 90 en el ámbito tanto nacional como internacional, paradójicamente se remonta en gran parte a iniciativas gubernamentales. Para limitar la creciente influencia que los actores no gubernamentales y –particularmente en Chiapas– eclesiásticos estaban ganando en las formas de organización locales y regionales, aun bajo el gobierno de Echeverría (1970-1976), y con el apoyo decisivo del partido-Estado y de las instituciones indigenistas del Estado, se crean los denominados «consejos supremos» para cada una de las etnias indígenas de México (Barre; Mejía Piñeros/Sarmiento Silva). Una vez centralizados en 1975 mediante la tutela institucional del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y después de haber sido sometidos en 1979-1980 al estricto control gubernamental y partidista, estos gremios indígenas exógenos subsisten sin impacto local alguno. Por ello, solo son redescubiertos y movilizadas en épocas de campaña electoral, para canalizar esporádicamente las reivindicaciones locales «hacia arriba». Sin embargo, se tiende a subestimar la importancia crucial de estos primerizos consejos locales y regionales, que reside en su rol indirecto de «escuela» y «trampolín» para los protagonistas del actual movimiento indígena independiente. Así, desde finales de los años 70, en el entorno de las instituciones indigenistas y de sus organizaciones intermedias se viene fermentando el nacimiento de una novedosa *intelligentia*

indígena, una especie de elite de maestros bilingües y promotores culturales localmente arraigados, pero fuertemente orientados hacia el Estado-nación<sup>1</sup>.

– Simultáneamente y en conciente oposición a este nuevo actor, inducido desde el Estado y orientado hacia el mismo, en las regiones indígenas de México surge asimismo desde finales de los 70 una segunda pauta organizativa, de origen igualmente exógeno. Las hoy «clásicas» organizaciones tanto de movimientos de campesinos-comuneros como de los jornaleros y campesinos sin tierra<sup>2</sup> nacen al amparo y con el fuerte apoyo personal de determinados «asesores externos», que sin excepción alguna provienen de la *intelligentzia* urbana y estudiantil del Distrito Federal, Monterrey y otras ciudades del país (Cazés; Monsiváis). Esta generación de los –literal o simbólicamente– «sobrevivientes» de la masacre de Tlatelolco, que desde la represión militar de 1968 rehúsa toda cercanía gubernamental, aspira a hallar en la población rural marginada un nuevo «sujeto revolucionario». Siempre dependiendo de su idiosincrasia programática y su específica orientación ideológica, los nuevos movimientos campesinos buscan establecer alianzas con partidos maoístas o trotskistas así como con comunidades cristianas de base<sup>3</sup>. Desde comienzos de los años 80, sin embargo, el éxito de este tipo de movimiento, expresado en un sinfín de tomas o redistribuciones de tierras jurídicamente conquistadas, obliga a sus «asesores externos» a pasar de una estrategia de polarización mediante conflictos de tierras a medidas concretas de desarrollo rural; de lo contrario, correrían el riesgo de perder el apoyo de su base, «pacificada» por haber obtenido las anheladas tierras (Fox/Hernández). En este contexto, al margen del persistente movimiento jornalero, pero en el seno de las «clásicas» regiones campesinas se constituye tanto en el nivel local como regional una amplia gama de *organizaciones de productores* (Martínez Borrego). Esta pauta organizativa recluta sobre todo al «campesinado medio» (García), una emergente capa que dispone de tierras suficientes como para desarrollar una agricultura, ganadería o silvicultura potencialmente comercializables; sus problemas por tanto ya no están centrados en conflictos jurídicos por tierras, sino que giran en torno de enfrentamientos comerciales con *coyotes* y demás monopolistas. Este nuevo tipo de campesinado descubre en los antiguos «asesores externos» del movimiento campesino clásico un aliado experimentado. Nace así una red altamente heterogénea de formas de organización rural, conformada, por un lado, por los gremios locales de productores y, por otro lado, por ONGs de asesores externos de origen urbano (Alatorre/Aguilar). Dichas ONGs comienzan a consolidarse cuando la primera generación de los «emigrantes» urbanos de 1968 se ve reforzada por una segunda generación, formada por aquellos que tras el temblor sísmico y social de 1985 descubren en el desarrollo rural un nuevo ámbito de acción (Beck).

1. El surgimiento y la consolidación de esta *intelligentzia* indígena son analizados para el caso purhépecha en Dietz 1999.

2. Para detalles sobre estos movimientos campesinos, cfr. Bartra 1985; Harvey 1990; y Otero.

3. Las líneas evolutivas generales de las diferentes tendencias de la izquierda mexicana son analizadas por Carr; Castañeda 1993; y Zermeño 1993.

A lo largo de los años 80, los contactos entre los protagonistas de ambas formas de organización permanecen esporádicos y localmente limitados. Ello se debe al abismo biográfico existente entre una *intelligentzia* urbana, por un lado, emigrada hacia las regiones indígenas para buscar de modo deliberado la lejanía del omnipresente Estado, y una nueva *intelligentzia* indígena, por el otro, necesariamente cercana a las instituciones gubernamentales que la generaron y cuyos protagonistas por definición solo pueden desarrollar sus carreras profesionales dentro del indigenismo oficial. Otro factor que ha contribuido decisivamente a separar a ambos actores reside en su respectiva actitud ante la Iglesia Católica:

– Una gran parte de las organizaciones de productores y de las ONGs, de forma directa –por ejemplo, a través de Acción Católica o de iniciativas diocesanas influidas por la Teología de la Liberación– o indirecta –gracias al impulso de las comunidades cristianas de base o al amparo del movimiento catequista– se remonta al ámbito de la Iglesia Católica (Núñez). Bajo el impacto del Concilio Vaticano Segundo de 1965 y de la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, y según la específica tendencia política y teológica de la diócesis en cuestión, los grupos cristianos trabajan abierta o encubiertamente dentro del espectro de las ONGs y de las organizaciones campesinas (Canto Chac; Muro).

– Aquellos indígenas que primero como maestros bilingües en sus regiones de origen y luego como funcionarios desempeñan su labor profesional en la Secretaría de Educación Pública y/o en las instituciones indigenistas, siempre mantienen distancia hacia los grupos cristianos<sup>4</sup>. Como intermediarios aún leales del Estado-nación surgido de la Revolución de 1910, los nuevos actores indígenas reproducen fielmente la actitud laicista y anticlerical convertida en programática gubernamental desde la Guerra de los Cristeros de 1929. Además, para desarrollar una política de educación bilingüe, el Estado mexicano en su fase indigenista inicial había recurrido abiertamente al apoyo del Instituto Lingüístico de Verano, de cuño evangelista y conservador, cuyo recurso a las traducciones de la Biblia a lenguas indígenas como eficaz método misionero fue adoptado por las «misiones culturales» del primer indigenismo posrevolucionario. La consecuente simpatía que desde entonces expresan varios representantes de la elite intelectual indígena hacia los grupos evangelistas refuerza aún más su actitud anticatólica.

### **Intermediarios enfrentados**

Estas diferencias contextuales en las cuales surgen como nuevos actores sociales rurales, por una parte, los activistas y veteranos de las ONGs y, por la otra, los futuros protagonistas de los actuales movimientos indígenas, estructurarán, a la vez, los primeros conflictos que desde mediados de los años 80 enfrentan a ambos en diversas regiones indígenas de México. Para evitar

4. Para detalles sobre las cambiantes políticas y programas del indigenismo, cf. Dietz 1995a.

dichos conflictos, ambas pautas organizativas se establecen en ámbitos opuestos: Mientras que la *intelligentzia* indígena se autolimita a actividades y reivindicaciones educativas y culturales, luchando por una biculturalización real del currículum escolar, solo nominalmente bilingüe y bicultural desde los años 70, las nacientes ONGs se dedican a ampliar los canales de comercialización de los productos de sus beneficiarios campesinos, a experimentar con tecnologías agropecuarias y forestales adaptadas a lo local y a (re)introducir formas de cultivo ecológicamente sustentables.

Dado que las instituciones gubernamentales solo fomentan a aquellos ejidos y gremios de productores que se encuentran integrados en el partido-Estado, ya desde un principio se genera una «división laboral» entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y las ONGs: las organizaciones leales al régimen se dirigen a las instituciones públicas así como a la confederación campesina del partido-Estado, mientras que aquellos productores que han adquirido su tierra gracias a su lucha dentro del movimiento campesino independiente solo serán apoyados por las ONGs a través de sus «grupos de base». Sin embargo, desencadenada la crisis del petróleo y atrapado por las exigencias de las instituciones crediticias multilaterales, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) comienza un decisivo giro ideológico y programático: el hasta entonces omnipresente Estado-nación, que había logrado integrar a la amplia mayoría de la población rural en sus instituciones gubernamentales y/o partidistas, va convirtiéndose en un cada vez más alejado, ausente y tecnocrático Estado neoliberal. Tanto en el ámbito del desarrollo rural como en su política indigenista de integración, la nueva elite en el poder declara al Estado como exento de responsabilidades. Los primeros programas integrales de desarrollo rural regional, aun iniciados bajo la presidencia de Echeverría, son sustituidos en esencia por medidas asistencialistas, destinadas a aplacar puntualmente situaciones de «explosividad» social, sin jamás poder generar un capital reinvertible por la propia unidad doméstica campesina. Por ello, ya a finales de los 80 la política de desarrollo se convierte en asunto casi exclusivo de las ONGs y de las organizaciones de productores, fuertemente apoyadas por la política de concertación implementada por el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) para poder dismantelar y retirar las instituciones públicas de fomento de aquellas regiones consideradas «no productivas»<sup>5</sup>.

El subsecuente «boom» de las ONGs coincide con el inicio de un cauteloso proceso de emancipación protagonizado por la elite intelectual indígena para desprenderse de la tutela oficial. La definitiva emancipación es posible gracias a la contradictoria coincidencia entre su institucionalización en el aparato gubernamental, por un lado, y la disolución del mismo aparato, por otro. Desde comienzos de los 80, la elite indígena había logrado conquistar cada vez más espacios dentro de las instituciones indigenistas y educativas hasta

5. La controvertida política de concertación es discutida por Canabal Cristiani; Harvey 1993; y Paré.

llegar a controlar direcciones generales y departamentos enteros. Los conocimientos y habilidades técnicas, burocráticas y políticas adquiridas dentro de las instituciones evidencian su carácter de «arma de doble filo» cuando el Estado neoliberal disuelve y/o margina por completo las dependencias gubernamentales en las que se desenvolvían los maestros, funcionarios y políticos indígenas. Cuando el Gobierno neutraliza definitivamente a la política indigenista, desdibujada al ser integrada en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), de cuño asistencialista, y ante la persistente discriminación y marginación sufrida por la elite indígena, ésta en su mayoría abandona su tutela institucional y su lealtad al Estado-nación, refuncionalizando sus conocimientos estratégicos hacia formas de organización independientes.

El redescubrimiento de la región y comunidad de origen que así se inicia, y la conciente reintegración en las estructuras consuetudinarias y en la jerarquía de cargos comunales, por otra parte, desencadena conflictos directos –y a menudo personales– entre ambos actores experimentados en la vida urbana. Tanto los activistas de las ONGs como los integrantes de la *intelligentia* indígena luchan por obtener y mantener el apoyo de la base campesina de la población local. Mientras que las ONGs dependen fuertemente de esta base como destinatarios y beneficiarios de sus proyectos de desarrollo para asegurarse el beneplácito y el apoyo financiero de sus agencias financiadoras nacionales y a menudo internacionales, los maestros bilingües reintegrados y los antiguos funcionarios indigenistas movilizan a sus vecinos campesinos para que participen en las actividades políticas de la comunidad indígena. Esta «lucha por la base» se polariza no solo por el mero choque entre intereses opuestos de intermediación (Alvarez Gándara). En el conflicto subyacen utopías sociales a menudo antagónicas. La «vieja guardia» compuesta de los activistas de las ONGs suele dirigirse a la unidad doméstica campesina como destinatario privilegiado de su «política de proyectos», con el objetivo casi siempre explícito de convertir las empresas familiares minifundistas –que se supone improductivas y atomizadas– en cooperativas económicamente rentables. Tanto para las organizaciones de inspiración maoísta como para las ONGs originadas en comunidades cristianas de base, el ideal subyacente lo constituye la comunidad igualitaria de individuos que poseen y producen de forma colectiva. Aun cuando este ideal de establecer cooperativas de producción, comercialización y consumo en la práctica es abandonado por casi todas las ONGs debido a la persistente resistencia de la misma unidad doméstica campesina, el «discurso cooperativista» sigue predominando en un gran número de ONGs y en sus organizaciones de productores.

Este discurso es tajantemente rechazado por la elite intelectual indígena, ahora reincorporada a sus comunidades, precisamente porque para las comunidades indígenas, en la práctica el cooperativismo igualitarista ha ido generando las mismas consecuencias que la tradicional política integracionista del Estado-nación. Tanto en política agropecuaria y forestal como en el fomento a las artesanías, ya desde los años 30 los proyectos indigenistas se vienen implementando bajo la forma organizativa de cooperativas de pro-

ducción o comercialización. Su objetivo explícito consiste desde entonces en re-educar al campesino «testarudo» e «individualista», convirtiéndolo en parte de un proletariado rural de masas jornaleras o asalariadas homogéneas, dóciles y solo así asimilables a la economía de mercado. La cercanía de este discurso seudo-socialista, que caracteriza al Estado-nación posrevolucionario y al cooperativismo de las ONGs, ocasiona desde finales de los años 80 un enfrentamiento cada vez más abierto entre dos modelos –ambos disidentes– de desarrollo rural:

– Por una parte, muchas ONGs así como los «asesores» del «campesinado medio» promueven un modelo de «apropiación colectiva del proceso de producción», una apropiación que ha de ser protagonizada por representaciones gremiales supralocales de las unidades domésticas partícipes (Moguel). Este modelo en su origen había sido concebido como una estrategia potencialmente revolucionaria en la lucha contra las cadenas privadas y públicas de intermediación capitalista, que serviría para «concientizar» a las masas campesinas de México (Rosa). Sin embargo, es precisa y paradójicamente esta estrategia la que bajo la política de concertación del gobierno de Salinas de Gortari y de su Pronasol, se convierte en el elemento crucial de la lucha interna desplegada por los tecnócratas neoliberales contra los «dinosaurios» monopolistas del partido-Estado. A lo largo de dicha lucha contra el Estado como «enemigo de clase», acaban confluyendo perfectamente la programática maoísta con la neoliberal.

– Por otra parte, aquellos representantes de la *intelligentzia* indígena que se han ido autoemancipando de su anterior tutela gubernamental favorecen un modelo alternativo, que en el nivel discursivo –y sobre todo en el contexto mediático de los debates continentales sobre el carácter del Quinto Centenario– reivindica la persistencia y necesaria descolonización de los pueblos indígenas, lo cual obligaría a redefinir al Estado-nación mexicano como una entidad «plurinacional». En la praxis, sin embargo, no es la etnia como tal, sino la comunidad local la que constituye el principal y a menudo único horizonte identitario. Por consiguiente, mecanismos consuetudinarios de la política local tales como la rotación de los cargos comunales, la reciprocidad y la voluntaria participación de las unidades domésticas campesinas –concebidas como autónomas– en las actividades de interés común intralocal son revitalizados y combinados con nuevos elementos de origen urbano<sup>6</sup>: el derecho de voz y voto no solo para los «cabezas de familia», sino igualmente para las mujeres y los jóvenes solteros así como la complementariedad entre asambleísmo plenario y comisiones temáticamente especializadas, un rasgo organizativo adoptado de experiencias obtenidas durante la participación en el movimiento magisterial disidente<sup>7</sup>. En vez de reivindicar la integración –más o menos igualitaria– de la población rural en los existentes mercados nacionales e internacionales, este modelo «comunalista» insiste en

6. Para ejemplos etnográficos de esta transformación de la comunidad, cf. Dietz 1999.

7. Los movimientos magisteriales son analizados por Cook y Foweraker.

el reconocimiento de la soberanía de la comunidad como tal y en su necesidad de renegociar las relaciones entre un Estado cada vez más distante y una población local cada vez más emancipada.

### **De destinatarios a ciudadanos**

Es finalmente la disidencia partidista del llamado neocardenismo, independizada en 1987-1988 del partido-Estado, la que logra por lo menos acercar a nivel nacional a los activistas de las ONGs y a la elite indígena recomunalizada. Dado que dicha disidencia, por lo menos en sus inicios, se autodefine como un nuevo tipo de «partido en movimiento» que como plataforma se abre a movimientos sociales tanto rurales como urbanos de composición altamente heterogénea (Cornelius; Tamayo), su abanico organizativo se convierte en un primer marco de referencia común que propicia alianzas personales y políticas más allá de las «trincheras» que sigue separando a los distintos movimientos. Aun cuando la polarización intralocal persiste e incluso se profundiza a raíz de la colaboración de varias organizaciones de productores en las medidas del Pronasol, el evidente fraude electoral conjuntamente sufrido en 1988 abre una nueva arena de actividades de común interés. Son sobre todo las ONGs dedicadas hasta entonces a proyectos de desarrollo rural así como los candidatos indígenas de la plataforma neocardenista directamente afectados por el fraude, los que de forma coordinada crean una red de organizaciones de la sociedad civil dedicada a la observación electoral (Bartra 1992; Durand Ponte). Desde su primera aparición en las elecciones municipales de 1989, esta novedosa Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia logra superar los límites estructurales que hasta entonces padecían ambas pautas organizativas:

Por un lado, la gran mayoría de las ONGs desplegaba una marcada *projectitis*, sufriendo un evidente contraste entre su retórica transformacionista e incluso revolucionaria, y su autolimitación a proyectos mínimos con escaso impacto multiplicador más allá de su clientela directamente beneficiaria (Alatorre/Aguilar). Por otro lado, el aislamiento regional del nuevo movimiento indígena, que lograba movilizar a comunidades enteras, por ejemplo para la resistencia frente a la contrarreforma agraria de Salinas, pero que pasaba desapercibido a nivel nacional, sobre todo por los importantes movimientos sociales urbanos (Dietz 1995).

No obstante, dado que Convergencia, como plataforma de observación electoral y su ampliación en el frente de organizaciones agrupadas desde 1993 como Alianza Cívica, permanecen dominadas por los activistas de las ONGs de desarrollo, la colaboración con organizaciones indígenas sigue siendo altamente esporádica y limitada a meros contactos personales. La decepción y el sentimiento de impotencia ante la persistente práctica del omnipoderoso fraude de la ingeniería electoral oficialista (Calderón Alzati/Cazés), contribuye a concientizar a gran parte de la población local acerca de sus derechos como ciudadanos mexicanos. Sin embargo, como el panorama de los partidos

políticos apenas ofrece alternativas cualitativas a la corrupción, al caciquismo y al clientelismo rural, tanto los comuneros campesinos como la elite intelectual se autolimitará a fortalecer a su respectiva comunidad indígena y a sus coaliciones regionales con comunidades vecinas<sup>8</sup>. Esta limitante estructural solo será cuestionada cuando en 1994 aparece con el EZLN un nuevo actor de composición básicamente indígena, pero que se caracteriza por un discurso dirigido antes que nada a la sociedad civil nacional (Nash). Mientras muchas ONGs se involucran en intermediar de forma tanto política como humanitaria entre los zapatistas y el Ejército, paulatina y paralelamente surge una red informal de contactos que se van generando entre el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN y las diversas coaliciones regionales de comunidades indígenas, vigorosas sobre todo en los estados del sur, sureste y occidente de México. Por ello, y a pesar de su escasa continuidad, las distintas plataformas sectoriales, estatales y nacionales de foros, asambleas y convenciones democráticas, directa o indirectamente impulsadas por el EZLN, constituyen un giro decisivo en la relación existente entre las ONGs y los movimientos indígenas contemporáneos. No es solo la coincidencia de estrategias compartidas a lo largo de las negociaciones chiapanecas (Reygadas), sino sobre todo la colaboración concreta y cotidiana, desplegada desde entonces a nivel intracomunal en varias regiones indígenas del país, la que simboliza una incipiente y a veces aún reticente confluencia entre ambos actores:

– Las autoridades locales así como los protagonistas de las coaliciones de comunidades, por un lado, reconocen la necesidad y urgencia de trascender la mera política de movilización para complementarla con una «política de proyectos». Para iniciar este tipo de proyectos endógenos de desarrollo local, deliberadamente recurrirán a los conocimientos técnicos y a los contactos con agencias financiadoras que ya han sido establecidos por los representantes de las ONGs<sup>9</sup>.

– Los propios activistas de las ONGs, por su lado, se verán paulatinamente sensibilizados –sobre todo gracias al discurso del EZLN dirigido con frecuencia a estas organizaciones– hacia el concepto de autonomía. Este concepto, proveniente del zapatismo histórico (Warman), promovido por las organizaciones indígenas, pero rechazado hasta entonces por las ONGs, prevé la reestructuración de la sociedad mexicana en función del reconocimiento de la mencionada soberanía de las comunidades y de sus representaciones regionales frente a todo tipo de actor exógeno, gubernamental o no-gubernamental (CNI). La declaración y el subsecuente establecimiento *de facto* de las primeras autonomías regionales obliga a las ONGs a someter su política de proyectos a las nuevas instancias locales y regionales de toma de decisiones.

8. Para el conjunto de la sociedad civil mexicana, este proceso de autoaislamiento, a menudo acompañado por una tendencia hacia la desmovilización, es analizado por Zermeño (1995 y 1996).

9. Para el caso purhépecha, ejemplos de este nuevo tipo de proyecto endógeno de desarrollo comunal son aportados y analizados en Dietz 1997.

Ambas pautas organizativas se benefician de esta colaboración, ya que en sus quehaceres cotidianos la comunidad indígena y su representación regional serán «profesionalizadas» gracias al decisivo apoyo obtenido por las ONGs. Estas, por su parte, adquieren una mayor legitimación y aceptación intralocales por el mero hecho de que sus programas y proyectos específicos son sometidos –a menudo de forma obligada– a los mecanismos de toma de decisiones comunalmente vigentes.

### **Perspectivas para el futuro**

Una vez que la intelectualidad indígena recomunalizada haya logrado emanciparse del paternalismo ejercido por el Estado-nación, la creciente implicación de las ONGs en la política local y regional obligará a éstas a iniciar un proceso semejante de emancipación de la persistente tutela desplegada por sus contrapartes internacionales. El marco común de este acercamiento recíproco entre ONGs y movimientos indígenas lo ofrece la convicción compartida por ambos de propiciar desde posiciones originalmente antagónicas una democratización y «ciudadanización» no solo del Estado, sino de la sociedad civil hasta ahora monopolizada por dicho Estado. Las inminentes elecciones presidenciales del año 2000 y el transcurso del proceso electoral pondrán a prueba la capacidad democratizadora de esta novedosa «coalición de descontentos» (Esteve), urdida entre actores tan desiguales. La observación electoral será una vez más el punto de confluencia visible entre las ONGs y los movimientos indígenas. A pesar de los importantes logros obtenidos en la lucha común por la apertura y «ciudadanización» sobre todo del Instituto Federal Electoral (IFE), la dinámica nacional de la contienda partidista corre el riesgo de relegar nuevamente a las comunidades indígenas así como a sus organizaciones a meros «espectadores» del proceso electoral.

Para muchas ONGs y/o partidos de oposición urbanos, los movimientos indígenas –gracias a su arraigo local– constituyen aliados sumamente útiles para la observación y el registro de «irregularidades» y fraudes cometidos por la persistente «ingeniería electoral» en lejanas regiones rurales. Sin embargo, hasta la fecha se carece de un modelo de organización política que integre a las organizaciones indígenas y a sus delegados en los mecanismos de participación política y de cogestión ciudadana, sin que dicha integración los obligue a desarraigarse definitivamente de sus comunidades de origen y con ello de su fuente de legitimidad. Las sucesivas «consultas populares» convocadas desde 1995 por el EZLN para debatir la cuestión del modelo más adecuado de organización política, de participación ciudadana y de autonomía territorial revelan la lejanía que aún persiste entre los movimientos indígenas rurales y sus «aliados» urbanos.

### **Bibliografía citada**

Alatorre F., Gerardo y Jasmine G. Aguilar: «La identidad y el papel de las ONG's en el ámbito rural» en *Revista Mexicana de Sociología* vol. 56 N° 2, 1994, pp. 159-163.

- Alvarez Gándara, Miguel: «Tendencias del movimiento popular acerca de la dependencia y la intermediación política» en J. Tapia Santamaría (coord.): *Intermediación social y procesos políticos en Michoacán*, ColMich, Zamora, 1992, pp. 307-318.
- Barre, Marie-Chantal: *Ideologías indigenistas y movimientos indios*, Siglo XXI, México, 1983.
- Bartra, Armando: *Los herederos de Zapata: movimientos campesinos posrevolucionarios en México, 1920-1980*, Era, México, 1985.
- Bartra, Armando: «La ardua construcción del ciudadano (notas sobre el movimiento cívico y la lucha gremial)», en J. Moguel, C. Botey y L. Hernández (coords.): *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Siglo XXI, México, 1992, pp. 25-32.
- Beck, Barbara: «Die Stadt gehoert allen und wir werden sie erobern»: Basisdemokratische Bewegungen in Mexikostadt nach der Erdbebenkatastrophe 1985» en W. Reusch y A. Wiener (eds.): *Geschlecht-Rasse-Ethnie: alte Konflikte und neue soziale Bewegungen in Lateinamerika*, Breitenbach, Saarbruecken-Fort Lauderdale, 1991, pp. 168-182.
- Calderón Alzati, Enrique y Daniel Cazés: *Las elecciones presidenciales de 1994*, La Jornada-UNAM, México, 1996.
- Canabal Cristiani, Beatriz: «Las organizaciones campesinas y la política del nuevo Gobierno» en *Cuadernos Agrarios* N° 1, 1-4/1991, pp. 11-22.
- Canto Chac, Manuel: «Los cristianos y los movimientos sociales en México» en: V.G. Muro y M. Canto Chac (coords.): *El estudio de los movimientos sociales-teoría y método*, ColMich-UAM-X, Zamora, 1991, pp. 175-194.
- Castañeda, Jorge: *Sorpresas te da la vida, México 1994*, Aguilar, México, 1994.
- Cazés, Daniel (ed.): *Memorial del 68: relato a muchas voces*, Demos, México, 1994.
- CNI [Convención Nacional Indígena]: «Declaración de la Montaña» en *Ce-Acatl* N° 67, 1995, pp. 17-19.
- Cornelius, Wayne A.: «Mexican Politics in Transition: the Breakdown of a One-Party-Dominant Regime», Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD, San Diego, 1996.
- Dietz, Gunther: «Zapatismo y movimientos étnico-regionales en México» en *Nueva Sociedad* N° 140, 1995, pp. 33-50.
- Durand Ponte, Víctor Manuel: «El movimiento por el respeto de los derechos humanos y la transición política» en V.M. Durand Ponte et al.: *La construcción de la democracia en México: movimientos sociales y ciudadanía*, Siglo XXI, México, 1994, pp. 288-318.
- Esteva, Gustavo: *Crónica del fin de una era: el secreto del EZLN*, Posada, México, 1994.
- Martínez Borrego, Estela: *Organización de productores y movimiento campesino*, Siglo XXI, México, 1991.
- Mejía Piñeros, María Consuelo y Sergio Sarmiento Silva: *La lucha indígena: un reto a la ortodoxia*, Siglo XXI, México, 1987.
- Moguel, Julio: «Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural (notas para la discusión de los pros, contras y asegunes de la apropiación del proceso productivo)» en: J. Moguel, C. Botey y L. Hernández (coords.): *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Siglo XXI, México, 1992, pp. 15-24.
- Monsiváis, Carlos: *Entrada libre: crónicas de la sociedad que se organiza*, Era, México, 1987.
- Nash, June: «The Fiesta of the Word: the Zapatista Uprising and Radical Democracy in Mexico» en *American Anthropologist* vol. 99 N° 2, 1997, pp. 261-274.
- Núñez, Oscar: *Innovaciones democrático-culturales del Movimiento Urbano Popular: ¿hacia nuevas culturas locales?* UAM-A, México, 1990.
- Reygadas, Rafael: «De cara al imaginario zapatista» en Mario B. Monroy (coord.): *Pensar Chiapas, repensar México: reflexiones de las ONGs mexicanas sobre el conflicto*, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, México, 1994, pp. 213-233.
- Rosa, Martín de la: «La investigación participativa y la organización campesina» en Imisac (ed.): *La organización campesina y los problemas de la investigación participativa: encuentro nacional sobre investigación participativa en el medio rural*, Imisac, Morelia, 1982, pp. 19-34.
- Tamayo, Jaime: *Neoliberalism Encounters Neocardenismo* en Joe Foweraker y Ann L. Craig (eds.): *Popular Movements and Political Change in Mexico*, Lynne Rienner Publishers, Boulder-Londres, 1990, pp. 121-136.
- Warman, Arturo: «The Political Project of Zapatismo» en: F. Katz (ed.): *Riot, Rebellion, and Revolution: Rural Social Conflict in Mexico*, Princeton University Press, Princeton, 1988, pp. 321-337.